

1. Los pensionistas de cesantía e invalidez que cumplieron con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes en el momento de la generación del derecho correspondiente.
2. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Ley N.º 20530 que, a la fecha de entrada en vigencia de la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, habían cumplido con todos los requisitos para obtener la pensión correspondiente.
3. Los actuales beneficiarios de pensiones de sobrevivientes que cumplieron con todos los requisitos establecidos en las normas vigentes en el momento del fallecimiento del causante.
4. Los futuros sobrevivientes de pensionistas de cesantía e invalidez o de trabajadores activos a que se refiere el numeral 2 del presente artículo, comprendidos y regulados en el Capítulo III del Título II del Decreto Ley N.º 20530”.

Es decir, en todos los casos, para determinar quiénes deben recibir una pensión del régimen del Decreto Ley N.º 20530, **se toman en cuenta las normas vigentes al momento de la obtención del derecho**, y no aquellas normas que hubiesen entrado en vigencia con posterioridad.

4. Concluye en este extremo el Tribunal Constitucional en el siguiente Fundamento de la sentencia aludida, que la obtención de una pensión del régimen del Decreto Ley N.º 20530 es una cuestión *de iure* y no *de facto*. Es decir, **deben entenderse incorporados en el régimen del Decreto Ley N.º 20530 a todos los trabajadores, pensionistas y sobrevivientes que antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, hubiesen cumplido con los requisitos legales para obtener una pensión en dicho régimen, aun en los supuestos en los que arbitrariamente la Administración se hubiese negado a otorgarlo o posteriormente lo hubiese desconocido.**
5. El artículo 94 de la Constitución Política enuncia que, “el Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de Ley; ... gobierna su economía; y sanciona su Presupuesto” ... El artículo 3 del Reglamento del Congreso prescribe que: “El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política”.